



La consulta plantea si la cesión de datos identificativos y académicos del alumnado de postgrado a dos profesores de la Universidad consultante, con la finalidad de realizar una base de datos histórica, resulta ajustada a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La cesión de datos entre Administraciones con fines estadísticos ha sido objeto de diversos informes de esta Agencia, de los cuales se reproduce a continuación el formulado con fecha 13 de marzo de 2009, por contestar a las diferentes cuestiones planteadas en la consulta.

“La consulta plantea si resultaría conforme a la normativa de protección de datos la cesión, por parte de la Secretaría de la Facultad Universitaria consultante, a una profesora de dicha Facultad de los datos relativos al DNI y las calificaciones de los alumnos que cursaron 8 asignaturas de una determinada materia durante un concreto curso académico, con la finalidad de realizar un estudio enmarcado dentro de un proyecto de investigación y docencia universitaria del programa nacional de investigación 2004-2007. Según se expone, el objetivo de dicha solicitud es comparar las calificaciones con una encuesta realizada, a solicitud de la profesora, a los alumnos que asistieron a las clases de las 8 asignaturas.

Con carácter general debe indicarse que la comunicación de dicha información, que debe considerarse está integrada por datos de carácter personal en el sentido del artículo 3 a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en lo sucesivo LOPD) que define estos como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, constituye una cesión de datos de carácter personal, definida en la letra i) del mismo artículo de la propia norma como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones de datos, prescribe el artículo 11.1 de la LOPD que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.

No obstante el apartado segundo de dicho artículo contempla una serie de supuestos en que las cesiones de datos no requieren el consentimiento de los interesados, entre los que se encuentran, en lo que

ahora interesa, el recogido en las letras a) y e) de su apartado segundo, esto es, que la cesión esté autorizada en una ley; y que la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

Cabe señalar, en primer lugar, que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades prevé en relación con los estudiantes universitarios una excepción al consentimiento para la cesión de sus datos, sin embargo, los términos del precepto, no resultan comprensivos del estudio a que se refiere la consulta, establece a dicho respecto el número tercero de la disposición adicional vigésimo primera de dicha norma que “No será preciso el consentimiento de los estudiantes para la publicación de los resultados de las pruebas relacionadas con la evaluación de sus conocimientos y competencias ni de los actos que resulten necesarios para la adecuada realización y seguimiento de dicha evaluación.”

En lo que se refiere a la cesión de datos entre Administraciones Públicas y en el seno de una misma Administración, tiene un régimen específico establecido en el artículo 21 de la LOPD que, en la redacción resultante de la Sentencia del Tribunal constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, dispone que “los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.”

Teniendo en cuenta que la finalidad de realización del estudio es esencialmente estadística, debe indicarse que, según se ha venido sosteniendo por esta Agencia, de los citados preceptos se desprende que la utilización de los datos sólo sería posible en caso de que el estudio estadístico estuviera previsto en las normas reguladoras de los planes estadísticos correspondientes a la Administración territorial en cuyo ámbito se realizase el estudio.

En este sentido, se ha venido entendiendo que la comunicación amparada por la LOPD en relación con el ejercicio de actividades estadísticas se encuentra vinculada al deber de comunicación impuesto a las Administraciones Públicas de facilitar la información relevante para su realización en los supuestos en los que la legislación estadística impone esta obligación.

Dicho esto, en el ámbito estatal, el artículo 7.1 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, reguladora de la Función Estadística Pública, establece que “se establecerán por Ley las estadísticas para cuya elaboración se exijan datos con carácter obligatorio”.

Esta previsión fue desarrollada por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, cuyo apartado y), incluido por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, indica que serán de cumplimentación obligatoria “las estadísticas que formen parte del Plan Estadístico Nacional y específicamente según el artículo 45.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, aquellas cuya realización resulte obligatoria para el Estado español por exigencia de la normativa de la Unión Europea. Asimismo, las estadísticas que pudieran realizarse al amparo del artículo 8.3 de la citada Ley”.

En la solicitud de información efectuada por la consultante no se hace constar la inclusión del estudio analizado entre los contenidos en el Plan Estadístico Nacional ni en el correspondiente Programa Estadístico Anual, por lo que no puede conocerse si el mismo ha de ser considerado o no como comprendido en la regla establecida en el artículo 7.2 de la Ley 12/1989. Tampoco consta que dicha solicitud se ampare, en términos similares a los mencionados, en la legislación estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En consecuencia, la comunicación de datos planteada únicamente se encontraría amparada en el tratamiento ulterior de los datos con fines estadísticos en caso de que el estudio al que se refiere la solicitud pueda ser considerado como estadística de cumplimentación obligatoria a los efectos previstos en la Ley 12/1989 o en la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por ello debe concluirse que, no considerando la cesión amparada en las excepciones previstas en el artículo 11.2 de la LOPD, será preciso obtener el consentimiento de los interesados. Este consentimiento, que habrá de ser libre, específico, informado e inequívoco, conforme exige el artículo 3. h) de la Ley, podrá recabarse mediante un escrito dirigido por la Universidad a los alumnos, indicando con claridad y precisión la cesión que va a ser realizada, así como la finalidad de la misma, concediendo un periodo de tiempo lo suficientemente amplio para que el interesado pueda oponerse a la inclusión de sus datos en el fichero cedido.

No obstante, debe señalarse que cabría la cesión de las calificaciones de los alumnos sin necesidad de obtener el consentimiento de éstos, si los datos se encuentran debidamente disociados. En este sentido el artículo 3, letra f) de la LOPD define el procedimiento de disociación como *“todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.”* Por su parte, el Reglamento de desarrollo de la LOPD califica como dato disociado *“aquél que no permite la identificación de un afectado o interesado.”*

Para que un procedimiento de disociación pueda ser considerado suficiente a los efectos de la LOPD, será necesario que de la aplicación de dicho procedimiento resulte imposible asociar las calificaciones a un sujeto determinado. En este sentido, las disposiciones internacionales reguladoras de la protección de datos de carácter personal vienen a considerar que el afectado no será determinable cuando su identificación exija un esfuerzo desproporcionado que sea suficiente para disuadir a quien accede al dato de la identificación de la persona a la que el mismo se refiere.

Por consiguiente, si de la información relativa a las calificaciones que se facilite, puede deducirse la identidad del afectado sin realizar esfuerzos desproporcionados (si, por ejemplo, las calificaciones se comunican manteniendo el orden alfabético de los apellidos, de manera que pueda establecerse una correlación entre las notas y el alumno) no estaríamos ante un supuesto de disociación y estaría plenamente sometido a las disposiciones de la LOPD, siendo preciso el consentimiento del interesado. “

Por último, en lo que se refiere a los medios de comunicación con esta Agencia, en el apartado canal del ciudadano de nuestra página web (www.agpd.es), figuran actualizados los teléfonos y direcciones de correo electrónico a través de las cuales pueden contactar con la misma, atendiéndose a través de los teléfonos de atención al público (901 100 099 ó 91.266.35.17) indistintamente tanto las consultas de los particulares como las de las Administraciones Públicas.